



JUSTICONOMÍA

Ya en serio, ¿hacia dónde va la economía?

Por Jorge Torres Góngora

-Con afecto solidario a quienes fueron brutal y cobardemente reprimidos en la marcha del 15-

En este espacio hemos llamado la atención ya varias ocasiones sobre la narrativa económica del gobierno federal, la cual, hemos dicho, podría catalogarse como hiper-optimista. No hay elementos para afirmar que se trata de un engaño premeditado, en que uno de los principales afectados sería el propio gobierno, el cual ha basado sus estimaciones de ingresos presupuestarios en esa actitud de optimismo económico, y, por tanto, su programa de gasto público, en el cual basa buena parte de su estrategia política.

Sin embargo, hay algunos aspectos en que la visión económica es diametralmente diferente entre la actual administración, y diversos especialistas nacionales e internacionales, y los datos de instituciones serias como el INEGI y el Banco de México, dirigen la mirada hacia una perspectiva que podría resultar, tal vez, más realista.

Recientemente el Secretario de Hacienda y Crédito Público reconoció, en una actitud responsable y valiente, aunque inevitable, que la economía mexicana retrocedió en el tercer trimestre. Ante ello, responsabilizó a factores externos, como la incertidumbre a nivel mundial que provocó una actitud de cautela por parte de empresas y hogares, lo cual se reflejó en los niveles de inversión y de consumo, en que los actores económicos atrasaron decisiones de gasto.

Aunque el Secretario, principal responsable de la política económica, afirmó que ese ambiente representa hasta el momento un elemento negativo, también aseguró que habrá un renovado dinamismo en la economía nacional, derivado de diversos factores como lo son el Plan México; el fortalecimiento del empleo; la recuperación de los salarios reales, el impulso de los programas sociales a la economía popular; la realización de importantes obras de infraestructura; la fortaleza del País por su atractivo a la inversión extranjera, entre otros.

Sin embargo, sus afirmaciones se basan en variables macroeconómicas que podrían resultar endeables. Una de las más importan-

tes en tal sentido, que es el crecimiento económico, se fijó, para efectos presupuestarios, en un rango promedio de 2.3%, cuando diversos especialistas, instituciones financieras nacionales y organismos internacionales, han previsto que sería si acaso del 1.5%, aunque podría ser aún mucho menor.

Lo anterior provoca serias dudas sobre el nivel real de ingresos presupuestarios que se va a recaudar en el siguiente ejercicio fiscal, lo cual podría implicar a su vez que sea necesario realizar ajustes al gasto público, en perjuicio de la población que recibe los servicios y beneficios del gobierno.

Y es que hace unos días el INEGI informó de una caída en el tercer trimestre del 0.3% en el PIB, la cual parece leve pero no por ello menos relevante, que resalta la falta de crecimiento económico e indica que el estancamiento va por un rumbo negativo. Hay que destacar que el PIB del sector secundario fue el que mayor reducción tuvo, con un 2.9% en sentido negativo. Este sector es el de la industria, donde están por ejemplo las manufacturas, la construcción y la energía, y en donde la inversión es un ingrediente esencial. Mientras tanto, el PIB del sector terciario aumentó en solo 0.9% y el del primario, que por cierto ha salvado el dato integral en otras ocasiones, tuvo una evolución positiva del 3.0%.

La inversión fija bruta, tanto del sector público como del privado, también está cayendo a niveles aún mayores. Según el dato más reciente del INEGI, de agosto, la caída fue del 8.9% respecto al 2024. Hay que destacar que tan solo la inversión pública en construcción cayó en 31%.

Aunque es cierto que la desocupación es reducida, que fue de solo el 3% en septiembre, hay que precisar que ésta ha ido en aumento, ya que en meses previos fue menor, incluso del 2.6%. Por otro lado, el ámbito laboral de carácter informal se ubicó en 54.9% del total, es decir que más de la mitad de la

población, aunque ocupada, se encuentra en condiciones laborales poco óptimas, sin prestaciones ni certeza sobre su empleo.

Una pequeña pausa. En este espacio hemos tratado de no desviar la atención de los temas económicos y financieros, a menos que se trate de algún asunto con repercusiones importantes en estos ámbitos. Es claro, desde el nombre de esta columna, que su principal interés es el de la reflexión sobre la justicia económica, que debe ir de la mano de la justicia social.

Sin embargo, considero imperantemente necesario comentar aquí acerca de la respuesta desproporcionada de las fuerzas policiacas (del orden, se les denomina) ante la actitud desesperada de algunas personas que fueron a la marcha del sábado pasado.

La violencia no se justifica de ninguno de los bandos (que deberían ser uno solo, el del pueblo), pero sería deseable que el régimen mostrara mayor comprensión, y hasta empatía, con el enojo y el coraje que sufren varios sectores sociales ante la evidente falta de rumbo y de resultados positivos en ciertos ámbitos del devenir nacional.

No se trata de un invento, ni de ataques sin fundamento. La corrupción, pública y privada, sigue corroyendo la economía del País y erosionando el bienestar social, mientras que la violencia desenfrenada, no respeta límites, le ha robado la paz a cientos de miles, quizá millones, de familias que no pueden vivir tranquilas en distintas regiones de México, y ha vuelto inviables a otro tanto de empresas pequeñas y medianas, que no tienen otra opción más que cerrar sus puertas si no comparten sus ganancias con el crimen organizado, incluso aunque no las haya, lo cual no los libera del deber de aportar su cuota forzosa.

Seguramente resultaría injusto e impreciso -aún- hablar de un narco Estado. Sin embargo, el crimen organizado, encabezado por el narcotráfico, cuenta con más recursos que el gobierno, y actúa como si estuviera

por encima de él, en diversas latitudes de la geografía nacional, desafiando a gobernantes, eliminándolos o asociándose con ellos. Y eso sucede



no solo en Sinaloa o Michoacán sino en Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, entre otros estados. No es asunto de un solo partido. Y no se percibe, ante ello, un combate frontal y

efectivo desde el gobierno contra esas fuerzas oscuras, que revierta la situación.

Desconocer lo anterior sería negar lo evidente y partir de un diagnóstico falso que haría imposible resolver los grandes problemas nacionales. Ante ello, lo deseable es que desde los más elevados niveles del gobierno haya una actitud de apertura al diálogo y de inclusión para buscar construir soluciones viables y eficaces, en que se dé cabida incluso a los adversarios del régimen, sin culpar solo al pasado y sin importar criterios ideológicos o de geometría política. Esa es la única salida democrática posible.

Al final, los responsables de encontrar e implementar la solución son quienes actualmente detentan el gobierno, a quienes el pueblo eligió para resolver los problemas,

no para administrarlos ni mucho menos para evadirlos o distribuir culpas.

La percepción social de distintos actores sobre el reflejo y la remembranza de regímenes antidemocráticos y autoritarios en la confrontación policial contra la manifestación social resulta inevitable. Las imágenes de policías golpeando cobardemente por la espalda a jóvenes ya sometidos, pateando salvajemente a personas que están vencidas en el suelo, lanzando indiscriminadamente toletazos y gases lacrimógenos sin importar que se lastimara a quienes se manifestaban pacíficamente, o derribando abusivamente a quienes no hacían más que mantenerse firmes ondeando la bandera nacional, no deben suceder nunca más.

Los encargados de este operativo y los perpetradores de los abusos, que está claro quiénes son, deben ser castigados, y los responsables políticos de estos actos deben enfrentar sus consecuencias.

En el ámbito económico, como hemos visto, los desafíos no son menores y el cambio de rumbo se percibe necesario, tanto desde el sector público como del privado. La situación del empleo es precaria, con traba-

jos en su mayoría mal pagados y sin las condiciones ni las prestaciones adecuadas para que la mayoría de las familias mexicanas accedan a una vida digna y sin apuros.

La economía está estancada, y con enorme incertidumbre sobre su evolución futura. La inversión no fluye, y al contrario decae. Los sectores que deberían impulsar el crecimiento, van en caída libre. La infraestructura pública no crece al ritmo debido. Los beneficios del comercio internacional son solo para unos pocos. Hay serias dudas sobre el Estado de Derecho.

Ante ello, no hay una respuesta clara ni decisiva de los actores involucrados, ni mucho menos un golpe de timón. Se trata de un asunto de Estado, y deben involucrarse en la solución el sector privado, las organizaciones sociales, los partidos políticos, el Congreso de la Unión, los gobiernos de todos los órdenes, entre otros. Es necesario que cuanto antes se realice una amplia convocatoria para reflexionar y debatir sobre un diagnóstico preciso de la economía mexicana, sus principales requerimientos y las alternativas para recuperar el crecimiento, detonar la inversión, el empleo bien remunerado y el bienestar social. Es lo justo.